

**Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.**

**VISTO:**

Ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se substanciaron estos autos RIT N° O-7336-2020, caratulados “Ríos con Constructora Echavarri Hermanos Limitada”, sobre despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones, interpuesta por Patricio Ríos Ponce, en contra de Constructora Echavarri Hermanos Limitada (actual Constructora SAE Limitada) e Inmobiliaria Coloso Los Leones Limitada, esta última en calidad de demandada solidaria.

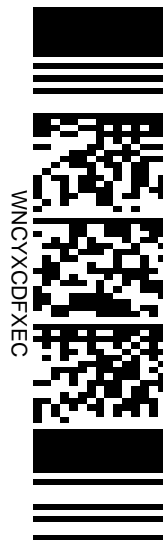
Por sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el juez suplente Jorge Escudero Navarro, se acogió la demanda declarando improcedente y nulo el despido, condenando a Constructora SAE Limitada al pago de indemnizaciones, remuneraciones y demás prestaciones que indica y -en lo que interesa al recurso- condenando solidariamente a Inmobiliaria Coloso Los Leones Limitada, sólo al pago de obligaciones laborales y previsionales del período que duró la subcontratación -del 4 enero 2019 al 30 septiembre 2020- excluyéndola de la condena por sanción de nulidad de despido, sin costas.

En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de nulidad, fundando en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, aseverando que el fallo fue dictado con infracción a los artículos 162 incisos 5° y 7°, 183 B, 183 C y 183 D, todos del mismo cuerpo legal.

Declarado admisible el recurso, se procedió a la vista del mismo, oportunidad a la que asistieron los abogados de ambas partes y fueron escuchados sus alegatos por video conferencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** En cuando al recurso interpuesto, afirma que el fallo incurrió en infracción de las normas citadas, al no haber condenado a la sanción de nulidad de despido a la demandada solidaria Inmobiliaria Coloso Los Leones Limitada, limitando su responsabilidad al período que duró la subcontratación, terminada el 30 de septiembre de 2020, previo al despido del demandante ocurrido el 2 de octubre del mismo año; no obstante dicha sanción tiene su origen en un incumplimiento de la empresa principal



durante la vigencia del trabajo en régimen de subcontratación, del cual la empresa mandante es responsable de supervigilar mientras se encuentre en vinculación con la empleadora.

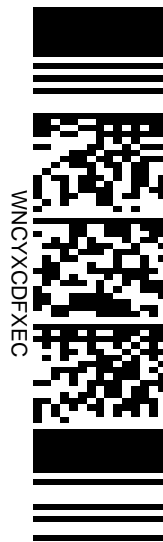
Por lo mismo, refiere que la sanción del artículo 162 incisos 5º y 7º corresponde ser aplicada adicionalmente a la empresa principal de una obra en el marco de la subcontratación, por cuanto ésta debió estar informada en todo momento del pago de cotizaciones previsionales, supervisando que se encuentren al día, por cuanto sobre ella pesa el deber de información y derecho de retención.

Considera que el sentenciador incurre en una errada interpretación del precepto legal, al limitar su aplicación, en cuanto a la responsabilidad de la empresa dueña de la obra, al período en que se prestaron servicios bajo el régimen de subcontratación, dejando de lado lo acreditado en autos en orden de no estar pagadas las cotizaciones del demandante, en períodos comprendidos en esa vinculación contractual.

Solicita por tanto se acoja el recurso, anulando parcialmente el fallo a fin de condenar solidariamente a Inmobiliaria Coloso Los Leones Limitada, respecto a la sanción de nulidad de despido.

**SEGUNDO:** En relación a la causal invocada, es menester indicar que resultan ser hechos asentados en el proceso los siguientes:

- a) El actor prestó servicios subordinados, como “administrativo de obra”, para la demandada principal desde el 2 de enero de 2019 hasta el 2 de octubre de 2020, fecha en que fue despedido, invocándose la causal legal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.
- b) El actor estuvo sujeto a un régimen de subcontratación desde el 4 de enero de 2019 y hasta el día 30 de septiembre de 2020. Es decir, el actor fue despedido dos días después del término del contrato comercial entre las demandadas.
- c) La mandante no dio cumplimiento al deber de información en los meses de abril, junio, julio, agosto y septiembre de 2020.
- d) Las cotizaciones previsionales del actor desde enero de 2019 y hasta abril de 2020 se encuentran pagadas, sin embargo se constató deuda previsional en los meses posteriores, según el siguiente detalle: AFP



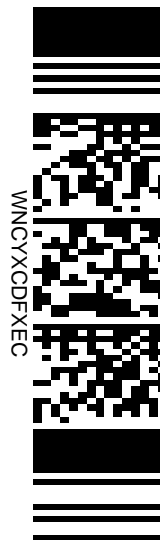
Modelo: mayo, junio, julio, agosto y septiembre; FONASA, julio y agosto; AFC Chile S.A., mayo, junio, julio, agosto y septiembre e Instituto de Seguridad del Trabajo, septiembre, todos de 2020.

- e) El demandante estuvo sujeto a un pacto de suspensión de contrato a contar del 1 de abril de 2020, percibiendo el pago de subsidios mediante 7 giros, siendo el último de ellos el 6 de noviembre de 2020. Además estuvo con licencia médica desde el 3 al 17 de abril de 2020, desde el 11 de mayo al 14 de junio de 2020 y desde el 18 de junio y hasta el 31 de agosto de 2020, percibiendo los respectivos subsidios.

En razón de lo anterior el juez del grado condenó a la empleadora al pago de las prestaciones solicitadas -incluyendo a las que da lugar la nulidad del despido- sin embargo, limitó la condena a la mandante en régimen de subcontratación únicamente al pago de las prestaciones devengadas al período que va desde el 4 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.

**TERCERO:** Es necesario tener presente que la responsabilidad solidaria de la empresa principal o mandante y de la contratista, derivada del régimen de “subcontratación” -que puede devenir a subsidiaria-, comporta la implementación de una garantía de origen legal y de naturaleza laboral. En tal sentido, la conclusión del sentenciador del grado, tal como lo asevera el recurrente, yerra en la aplicación de los artículos 162 y 183 B del Código del Trabajo, por cuanto descarta la garantía legal aludida a causa que la relación laboral del actor con la demandada principal se extendió por escasos dos días más al término del contrato comercial entre las demandadas.

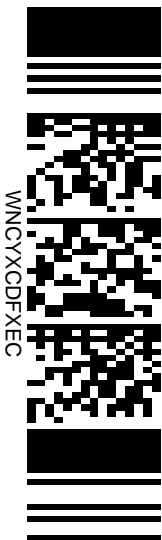
Al respecto, es preciso consignar que el límite temporal a que alude el artículo 183-B del Código del Trabajo ( *“Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal”*), debe entenderse en el contexto del fundamento antes referido, pero especialmente en el sentido que con ello la ley buscó hacerse cargo de la posibilidad de que el trabajador haya prestado sus servicios en distintas *“obras, empresas o faenas”*, precisamente porque la empresa principal o la contratista no son empleadoras. De esa forma, resultaría desproporcionado hacerlas responsables de obligaciones laborales



y previsionales devengadas en un lapso diferente al de la prestación de servicios que les beneficiara. Desde esa óptica, lo que importa verdaderamente no es si el régimen de subcontratación continúa vigente al tiempo del término de la relación laboral –como lo sugiere la sentencia-, sino la época del devengo de la obligación laboral o previsional incumplida y, particularmente, el momento en que se verificó su infracción. En el caso, además que el plazo transcurrido entre el término del régimen de subcontratación y el despido del actor es insignificante, resulta evidente que el no pago de cotizaciones ocurrió durante la vigencia del régimen de subcontratación, por lo que los efectos de tal incumplimiento deben alcanzar a la empresa mandante.

**CUARTO:** No obstante lo anterior, no puede olvidarse que, como toda nulidad, este arbitrio responde al imperativo de la relevancia, en el sentido que no basta la verificación de un vicio para disponer la invalidación de un fallo. Esto que se dice está expresado en el mismo artículo 477 del Código del Trabajo al condicionarse la invalidación a la circunstancia de que el error de derecho o la infracción de ley tenga “influencia sustancial en lo dispositivo del fallo”, exigencia que remarca el artículo 478 del mismo Código, cuando se indica que *“No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo...”*.

**QUINTO:** En ese orden de ideas, no debe soslayarse el hecho que las cotizaciones que quedaron adeudadas se generaron durante el preciso período en que el actor estuvo sujeto a una suspensión de la relación laboral, conforme a los términos de la ley 21.227, suspensión que rigió desde el 1 de abril de 2020, con un último retiro generado el 7 de noviembre, lo que hace aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28 de la ley citada, en orden a que *“Los empleadores que, durante la vigencia de las normas del título I de la presente ley, no hubieren pagado dentro del plazo legal la cotización obligatoria establecida en el artículo 17, la comisión destinada al financiamiento de la administradora que se señala en el inciso tercero del artículo 29 y la destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, todos del decreto ley N° 3.500, de 1980, y las pagaren dentro de la vigencia de dicho Título o dentro de los veinticuatro meses posteriores a su término, podrán pagarlas por parcialidades que no superen el antedicho plazo de veinticuatro meses.”*



De este modo, debe concluirse que por disposición legal operó una flexibilización y ampliación del plazo y modalidad para el pago de cotizaciones de seguridad social respecto de relaciones suspendidas, situación que impide considerar que el empleador estuviese constituido en mora al momento del despido e impide el efecto que disponen los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

En conclusión, la infracción del juez del grado no posee la relevancia necesaria para declarar nula la sentencia, al menos en el margen del presente arbitrio.

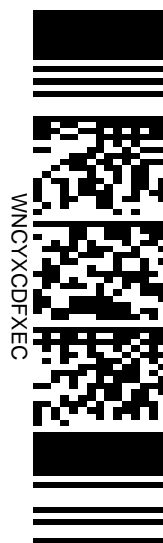
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **se rechaza, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por la demandante en contra de la sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en autos RIT O-7336-2020.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra (s) señora Paola Díaz.

No firma la fiscal judicial señora Hernández, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por estar con feriado legal.

Nº 889-2022.-



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C. y Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

